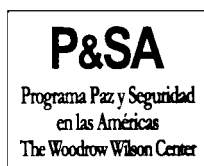
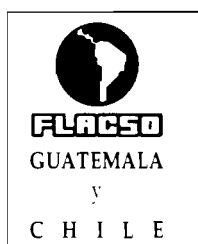


Francisco Rojas Aravena
Bernardo Arévalo de León
Carlos Sojo
Editores

SOCIEDAD, ESTADO Y
FUERZAS ARMADAS:
LA NUEVA AGENDA DE
SEGURIDAD EN
CENTROAMÉRICA

SOCIEDAD, ESTADO Y FUERZAS ARMADAS: LA NUEVA AGENDA DE SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA

Francisco Rojas Aravena
Bernardo Arévalo de León
Carlos Sojo
(Editores)



CONTENIDO

Presentación /9

René Poitevin y Francisco Rojas Aravena

Introducción / 15

La paz: principio rector de las relaciones
en Centroamérica

Francisco Rojas Aravena

I PARTE

LA NUEVA AGENDA DE

SEGURIDAD EN CENTROAMÉRICA / 41

El final de los delirios: los nuevos desafíos
de seguridad centroamericana / 43

Carlos Sojo

Las fuerzas armadas y los nuevos desafíos
a la seguridad / 75

Leticia Salomón

Nicaragua y una nueva agenda de seguridad / 85
Elvira Cuadra

Los nuevos desafíos de la seguridad en Centroamérica:
una perspectiva desde Estados Unidos / 95
Cynthia J. Arnson

Los nuevos desafíos de la seguridad en
Centroamérica: una perspectiva desde México / 101
Lilia Bermúdez Torres

Los nuevos desafíos de la seguridad en
Centroamérica / 111
Oscar R. Campos Anaya

Seguridad en Centroamérica / 119
Rodolfo Cerdas

II PARTE

SOCIEDAD Y ESTADO: EXPERIENCIAS EXTRARREGIONALES / 127

La transición hacia la democracia / 129
Miguel Alonso Baquer

Las fuerzas armadas en la democracia / 167
Rüdiger Lentz

III PARTE

SOCIEDAD Y ESTADO EN GUATEMALA / 183

Sociedad, Estado y fuerzas armadas
en América Latina, sociedad y Estado
en Guatemala / 185
José Manuel Rivas Ríos

Sociedad y ejército en Guatemala:
elementos para una nueva relación / 197
Bernardo Arévalo de León

Sociedad, Estado y fuerzas armadas
en Guatemala: escenarios, riesgos y
dilemas en el postconflicto armado / 211
Edgar Gutiérrez

**Sociedad, Estado y fuerzas armadas
en Guatemala: escenarios, riesgos y
dilemas en el postconflicto armado**

Edgar Gutiérrez

I Guatemala, como otros países de América Latina, atraviesa por una redefinición del Estado y de las relaciones entre éste y la sociedad. Algunas preguntas básicas para este caso son: ¿Cómo los nuevos paradigmas de la modernización afectan esta relación? ¿Cómo se integra a fin de cuentas, el escenario político? ¿Qué dilemas abre para la democracia el modelo de Estado y sociedad que aquí se configura?

El arribo al gobierno del Partido de Avanzada Nacional (PAN), en 1996, tiene una honda significación en la rotulación del campo de las relaciones Estado-Sociedad y además en la redefinición del papel político de las fuerzas armadas. El PAN representa el retorno del gran empresariado a la gestión del poder público de una manera más o menos ordenada, tras la profunda crisis política y del modelo de crecimiento económico de principios de la década de 1980. De hecho, ha quedado ahora clausurada la etapa de 50 años de la guerra fría, de aplicación de las políticas de seguridad nacional y del enfoque desarrollista, que pusieron al centro de la gestión estatal al ejército y a sectores intermedios ascendentes (ordinariamente, ladinos y urbanos).

Eso significa que la desproporcionada mezcla de “alta seguridad” y discreto desarrollo que aquí se aplicó bajo la doctrina de la seguridad nacional, entró en un periodo de franca caducidad. Y el papel dirigista e intervencionista que

se le atribuyó al Estado, pero que en realidad nunca llegó a cristalizar, ahora es deslegitimado con una batería potente de argumentos: ineficiencia, burocratismo, corrupción, ineficacia, centralismo.

El asunto, naturalmente, se desplaza al terreno de las ideologías y al posicionamiento político. La vieja derecha conservadora y anticomunista, está rebasada por sectores modernos reconvertidos y capitales de rápido ascenso a partir de la segunda o tercera generaciones. La propuesta de ellos es una alta dosis de economía de mercado y la reorientación del poder público hacia un Estado de tipo gerencial, que facilite la dotación de infraestructura moderna de comunicaciones y se haga cargo de la seguridad interna. La vieja izquierda, tanto la civil como la armada, que abrevó del pensamiento liberal y se volvió revolucionaria, ahora modifica sustancialmente su programa y de una manera todavía balbuceante sugiere una estrategia defensiva del ideal del Estado benefactor.

El PAN expresa también una nueva, aunque limitada, alianza con el ejército para el co-gobierno. Alianza en la que las fuerzas armadas se expresan como un socio menor, en roles técnicos y como soporte de la gobernabilidad. Desde luego, ningún reacomodo del poder es fácil. Un ejército estamental de larga tradición contrainsurgente, acostumbrado a operar de manera encubierta tiene resistencias a su nuevo encuadre, sobre todo a la fiscalización ciudadana. Surgen entonces disidencias, se sufre la debilidad de los liderazgos, que a veces derivan en autonomías regionales operativas, y se genera una crisis de identidad. La actual alianza del PAN con una élite de la fuerza aérea profundiza aún más esas diferencias.

Una importante fracción militar -aquella que hincó sus intereses en el Estado contrainsurgente y que medró a la sombra de un "Estado subterráneo" que actuaba en abierta

impunidad- ha quedado desplazada, y ahora se atrinchera con quienes reclaman localmente los beneficios del triunfo de la guerra fría, o del conflicto armado interno, en su versión autóctono.

Ellos son una gama socialmente heterogénea. Incluyen el nuevo poder local que se articula en torno a los patrulleros civiles, los comisionados militares, los especialistas y oficiales militares retirados. (Hablo de una red de varias decenas de miles de personas, ampliamente extendida en la sociedad.) Y abarca hasta los antiguos agentes económicos que se comprometieron en el esfuerzo de la guerra interna, pero quedaron rezagados en la integración de los circuitos modernos del capital.

II El fracaso del golpe de Estado de Jorge Serrano, en mayo-junio de 1993, mostró con claridad la orientación de los nuevos papeles del gran empresariado y del ejército respecto a la institucionalidad que establece la agenda de la comunidad internacional en la onda de la globalización, y que reclama, a su vez, una sociedad en vías de renovación.

El golpe de Estado de Serrano marcó tres tendencias fundamentales. Por una parte, aceleró el temprano declive de los partidos centristas, de corte reformista y populista que representaban, entre otros, la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y la Unión del Centro Nacional (UCN), que eran básicamente resultado de la reforma política de 1982-83. Y con ello se evidenció la abultada impopularidad de los políticos profesionales de clase media con poco disimuladas aspiraciones empresariales.

Por otra parte, se estableció la alianza estratégica entre el gran empresariado y una fracción moderna de la élite militar, en particular de la Dirección de Inteligencia (D-2), que facilitó el afianzamiento de la legitimidad política con el

gobierno de Ramiro de León Carpio; también ayudó al desplazamiento de grupos conservadores del ejército, de la llamada "Cofradía" o comunidad de inteligencia militar formada en 1980, y al avance de los Acuerdos de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNNG).

En tercer lugar, el programa del postgolpe abrió más claramente la tensión -que hasta ahora no acaba de expresarse políticamente- entre democracia y modernización; entendiendo esta tensión como la dinámica contradictoria del aflojamiento de la exclusión política y cultural, por una parte, y la profundización de la exclusión económica, por la otra.

Digo que esta es una tensión todavía no expresada políticamente pues no sólo sus lógicas no guardan identidad, sino que además en su ritmo están desacopladas. La tardía negociación del conflicto armado interno y la disgregación de las élites izquierdistas influyó en la impreparación de las fuerzas políticas de contrapeso. Y aquí no me refiero sólo a la participación de los últimos eventos electorales, sino, más importante aún, aludo a la débil articulación y movilización de la izquierda, y su improvisado apareamiento en los escenarios del debate y la negociación de las políticas económicas y de reforma del Estado.

El desajuste de tiempos se refiere también a las decisiones que muchas veces bajo la presión de la urgencia toman los gobernantes, mientras que el ritmo de la ciudadanía es mucho más lento y bajo modalidades deliberativas para decidirse entre un viejo sistema ineficiente y otro en cuyas ventajas no acaba de confiar. El gobierno del PAN enfrenta, con más fuerza tras la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, los costos políticos de esa tensión entre democracia y modernización. Aunque en realidad el descrédito se extiende a los partidos políticos, la Policía Nacional, los tribunales de justicia y el Ministerio Público, es decir, al conjunto de la institucionalidad civil.

III El tema de la seguridad interna y la orientación del ejército a la defensa exterior, no escapa a estas tensiones; sobre todo en un período de postconflicto armado, como el que aquí vivimos. El análisis de la seguridad en este escenario es muy complejo pues en las manifestaciones del problema convergen múltiples factores. Algunos tienen que ver con el déficit social acumulado, que se amplifica en períodos de ajustes económicos. Por ejemplo, la pérdida creciente de los puestos de trabajo y el alarmante aumento del número de pobres. Otros se asocian con el vulnerable modelo de reinserción de los grupos armados y las expectativas no colmadas en los planes de resarcimiento y desarrollo. A esto se suma la decadencia de las instituciones públicas y las leyes, así como las notorias dificultades para emprender reformas profundas en las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.

Las formas de la democracia parecieran reñir con la seguridad de los ciudadanos. Cada vez con mayor frecuencia, tanto el Estado como la ciudadanía, acuden a los métodos de excepción para guardar la gobernabilidad, en un caso, o asegurar la sobrevivencia, en el otro. De una parte, operaciones encubiertas, detenciones ilegales, interrogatorios violentos, y la práctica cíclica de la llamada *limpieza social*, de otra parte, linchamientos, venadeos y juicios sumarísimos. El paréntesis de la excepcionalidad es ya tan prolongado que se transforma en un clima de “normalidad”.

Los escenarios del desplazamiento de las funciones del ejército no son menos conflictivos. El propio concepto de defensa externa que se le asigna a las fuerzas armadas en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, no ha sido aún precisado. La operatividad de términos como soberanía nacional, por ejemplo, está en serio cuestionamiento. La idea misma de seguridad nacional se tiene que ampliar a conceptos como el de desarrollo humano, déficit comercial, escasez de

recursos, endeudamiento, sobrepoblación, el surgimiento de nuevos centros de poder político y económico, las catástrofes naturales y la degradación ambiental, entre otros. Quiere decir que la seguridad nacional no se entiende sólo a nivel de amenazas militares. El Estado enfrenta ahora nuevos retos que determinan otras formas de relaciones internas y externas.

Por otro lado, el discurso ideológico de unas fuerzas armadas con una larga experiencia de control político bajo el modelo del Estado intervencionista y que en la lógica de la contrainsurgencia hizo del territorio nacional su cuartel, no deja de sufrir un impacto traumático; sobre todo si se considera que la modificación del pénsum de estudios de la Escuela Politécnica y las vías de acceso al profesionalismo civil de los oficiales militares subraya insistentemente el paradigma de la economía de mercado y la instrumentación del Estado en la lógica del pensamiento neoliberal.

Finalmente, el campo de la seguridad interna queda flagrantemente desprotegido. Sin planes de desarrollo, sin estrategias para superar las taras del aparato productivo (por ejemplo, el explosivo acceso a la tierra, la protección de los monopolios, la resistencia fiscal), sin fuerzas de seguridad civiles, con una floreciente narcoactividad y con los viejos aparatos de la *nomenklatura* militar convertidos ahora en bandas del crimen organizado, la gran tentación es transformar el formidable aparato militar contrainsurgente en un modelo de policía militarizada para garantizar a la ciudadanía su seguridad, paradójicamente volviéndola rehén.

¿Qué hace una democracia sin estadistas, sin un sistema de partidos funcional y con una sociedad débil propensa al caos? ¿Qué ocurre en una etapa de postconflicto en la que sólo emergen, casi intactos, un aparato militar con amplia capacidad de control social y unos agentes económicos con irrefrenable ímpetu de hegemonía estatal? Es altamente probable que de

este escenario surja una alianza y a la vez una fragmentación estratégica. Una alianza que sería un apretón de manos entre la *manu militari* y la mano más bien visible del mercado.

Para la ciudadanía seguirá siendo un objetivo central crear un sistema de seguridad orientado a proteger a la población, más que a controlarla. Para ello se requiere fortalecer el poder civil desde una sociedad política, económica y culturalmente relacionada a través de instituciones democráticas. Como se sabe, el nivel de control ciudadano sobre los aparatos de seguridad es proporcional al desarrollo democrático del país, y no a la inversa.

Esta publicación fue impresa en los talleres gráficos de Editorial Serviprensa C.A., en septiembre de 1998. La edición consta de 1,000 ejemplares en papel bond beige de 80 gr.